

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MARTHA LUZ DEL CARMÉN MONCADA LOPERA
DEMANDADOS	COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.
RADICADO	05001-31-05-012-2021-00148-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional
DECISIÓN	Confirma

Medellín, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **MARTHA LUZ DEL CARMEN MONCADA LOPERA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y la **AFP PROTECCIÓN S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 038**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de PROTECCIÓN S.A. contra la sentencia que profirió el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública

celebrada el día 21 de abril de 2022; y a su vez conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la demandante se afilió al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales desde junio de 1991; posteriormente, en agosto de 1995, se trasladó desde septiembre de 1994 al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., donde permanece actualmente.

Se duele que los asesores ejecutivos del RAIS no le brindaron la información suficiente para haber tomado la decisión pertinente con la información determinante y ajustada a su situación concreta; y que, al contrario, le ocultaron información relevante al momento de ser atendido para afiliarse a PROTECCIÓN S.A., por lo que considera que su decisión se encuentra viciada y afectada en su validez, por ausencia del conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de su traslado de régimen pensional.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se declare la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por PROTECCIÓN S.A., y que en consecuencia, se ordene a dicha administradora trasladar a COLPENSIONES la totalidad de los aportes de la cuenta de ahorro individual de la señora MARTHA LUZ DEL CARMEN MONCADA LOPERA, con sus respectivos intereses y rendimientos financieros, debiendo ordenar a esta última entidad recibir dichas sumas, aceptar al demandante en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad y proceder a reconocerle la pensión de vejez a la asegurada, condenando a las demandadas a reconocerle las costas procesales del juicio.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las demandadas_a descorrer el traslado de esta acción.

COLPENSIONES, a través de la contestación allegada (PDF 10 del expediente digital), se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción; negó los hechos de la demanda, salvo el agotamiento de la reclamación administrativa que adelantó la demandante, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“INEXISTENCIA DE LA INEFICACIA EN EL TRASLADO DE RÉGIMEN, INDEBIDA APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN MATERIA DE ASESORÍA DE TRASLADO PENSIONAL, LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA NO PUEDE SER APLICADA EN FORMA GENÉRICA SIN NINGUNA PONDERACIÓN Y EN DESIGUALDAD DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN UN PROCESO, ERRÓNEA INTERPRETACIÓN E INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1604 DEL CÓDIGO CIVIL”*, entre otras.

PROTECCIÓN S.A. descorrió el traslado de la acción, según se observa en el PDF 12 del expediente digital. A través de dicha respuesta negó los hechos de la demanda, salvo la afiliación y traslado de régimen pensional, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y, formuló las excepciones perentorias que denominó *“Inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, Buena fe, Prescripción, Aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones”*, entre otras.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 21 de abril de 2022, la Juez de conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de PROTECCIÓN S.A., y le impuso la obligación de trasladar a COLPENSIONES, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutora de la sentencia, el saldo de la cuenta de ahorro individual de la actora, incluidos los rendimientos financieros, los porcentajes del fondo de garantía de la pensión mínima, gastos de administración, primas previsionales con la respectiva

indexación de los descuentos y con la discriminación y pormenorización de todos los conceptos devueltos, especificándolos por su valor y características.

A COLPENSIONES le ordenó aceptar el retorno de la demandante, recibir las mencionadas sumas, activar su afiliación a prima media sin solución de continuidad, actualizando su historia laboral y continuar siendo su administradora de pensiones.

Condenó en costas procesales únicamente a PROTECCIÓN S.A., absteniéndose de hacerlo frente a COLPENSIONES.

El principal argumento de la A quo para declarar la ineficacia, desarrolló toda la tesis jurisprudencial que en la actualidad sostiene la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, sobre la inversión de la carga de la prueba, la insuficiencia del formulario para acreditar asesoría, la relevancia de la oportunidad en que se reciba la asesoría, la imposibilidad de que la ineficacia se sanee por prescripción o por traslados en el mismo régimen de ahorro individual con solidaridad y el derecho a la libre selección de régimen pensional.

En lo que tiene que ver con la pretensión de reconocimiento de la pensión de vejez, consideró la A quo que, si bien la demandante cumplió la edad pensional en el año 2019, momento para el cual contaba con más de 1,300 semanas cotizadas, ya que tenía más de 1,500 semanas, al no obrar en el plenario prueba de que la asegurada se hubiere retirado del sistema pensional, y haber quedado confesado en el interrogatorio de parte que la demandante en la actualidad se encuentra laborando y cotizando, resolvió que la demandante tenía derecho a la prestación, la cual debía reconocérsele teniendo en cuenta hasta la última cotización, bajo los lineamientos de la Ley 797 de 2003. Absolvió a COLPENSIONES del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al no advertir que la entidad haya incurrido en mora.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia fue apelada por el apoderado judicial de PROTECCIÓN S.A.

Recurrió la decisión de manera parcial, únicamente en cuanto se ordenó en la sentencia la devolución de las cuotas de administración y de lo descontado por seguro previsional, solicitando la revocatoria de dicha orden. Lo sustentó manifestando que estas deducciones se realizaron con fundamento en una disposición legal válida y aplicable, se trata de comisiones ya causadas y pagadas a terceros de buena fe, y son aplicables tanto en el régimen de ahorro individual como en el régimen de prima media con prestación definida. Agregó que, si se observa como ha sido la gestión de administración de PROTECCIÓN S.A., se puede advertir que dicha administradora ha puesto todo su conocimiento técnico, su experticia y experiencia para que la cuenta de ahorro individual de la asegurada genere unos rendimientos financieros significativos, del orden del 300% con relación a los aportes realizados. Si bien, no desconoce que la ineficacia genera que las cosas se retrotraigan al estado anterior, considera que no es posible devolver estos porcentajes a una entidad que efectivamente no ha administrado los recursos de la cuenta de ahorro individual de la asegurada, ya que hacerlo generaría un enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES. Mencionó que en el RAIS es diferente la naturaleza de estos descuentos o su finalidad, ya que en este régimen le está legalmente permitido a las administradoras hacer inversiones, cuidando y previniendo los riesgos existentes para que las cuentas administradas no sufran detrimento, a diferencia de lo que ocurre en prima media, donde no se pueden realizar inversiones en bolsa. Finalizó indicando que la demandante no hubiera alcanzado estos rendimientos en el régimen de prima media con prestación definida.

Alegatos de Conclusión:

En la oportunidad procesal correspondiente, la Dra. DANIELA ECHEVERRY GARCÍA, con TP Nro. 275.505 del CSJ, como apoderada judicial de COLPENSIONES, presentó alegatos de conclusión. A través de los mismos, expresó su inconformismo con la aplicación de la carga dinámica de la prueba, destacando que se relevó a la actora de cumplir con la carga probatoria que legalmente le correspondía, a sabiendas de que en el juicio no se probó la existencia de ningún vicio en el consentimiento. Se duele que se haya declarado la ineficacia del traslado de régimen pensional, cuando transcurrieron muchos años en los que la asegurada estuvo afiliada al RAIS; citó

jurisprudencia a efectos de solicitar que se revoque la sentencia de primera instancia; llamó la atención de este colegiado, en el sentido de que la actora se encuentra imposibilitada para trasladarse de régimen, al estar inmersa en la prohibición del artículo 2 de la Ley 797 de 2003; reseñó que COLPENSIONES ha actuado conforme a la ley y que no ha incurrido en ninguna acción u omisión que vaya en contra de los derechos de la demandante; por último, en virtud del principios de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, solicitó que, de confirmarse la declaratoria de ineficacia, se ordene el retorno de todos los recursos debidamente indexados y sin descuentos a la cotización.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- La Ineficacia en el traslado de régimen pensional.-

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por el apoderado judicial de PROTECCIÓN S.A en su recurso de apelación, sin embargo, esta Sala se encuentra facultada para revisar todos los aspectos de la condena a Colpensiones relacionada con la declarada ineficacia de traslado de régimen pensional y la aceptación del demandante en el régimen de prima media con prestación definida que administra, en virtud de la competencia de que se dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS., en Grado Jurisdiccional de Consulta.

Partirá la Sala de establecer si el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, que

realizó la demandante, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A. alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y el traslado entre regímenes que en tal virtud se efectúe, tiene como presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar del cambio de régimen pensional, el cual ha de venir suministrado y garantizado por el agente adscrito al respectivo fondo, esto es, es de la propia esencia del acto de traslado, el suministro cabal y absoluto de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a advertir que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.

Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y a través de las sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019, ha consolidado su línea jurisprudencial, la cual venía desarrollándose –en su orden- a través de las Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017, decantando que el deber de información es ineludible; que este tema a nivel procesal se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el

traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Es importante destacar que, el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que el asegurado se haya trasladado incluso entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

CASO CONCRETO

Sea lo primero reseñar, que conforme a la prueba documental obrante en el PDF 3 del expediente digital, se comprueba que la señora MARTHA LUZ DEL CARMEN MONCADA LOPERA, se afilió al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales desde junio de 1991; posteriormente, en agosto de 1995, se trasladó desde septiembre de 1994 al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., donde permanece actualmente.

Ahora, revisadas en detalle las consideraciones de la A quo para arribar a la decisión de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de la actora, esta Sala encuentra que las mismas se encuentran ajustadas al sentido de la jurisprudencia nacional, y consultan las particularidades del caso, teniendo

en cuenta que la AFP convocada a juicio (PROTECCIÓN S.A.) no alcanzó a probar haberle brindado asesoría a la actora con suficiencia en su proceso de traslado, en el momento en que la atendió para afiliarla.

Como lo ha decantado pacíficamente la jurisprudencia del órgano de cierre (Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017), es claro que la firma del formulario de afiliación no es una prueba certera de que hubiere existido un verdadero cumplimiento por parte de los fondos privados. La simple firma del formulario por parte de la asegurada no puede tenerse como una prueba de que se le haya informado a cabalidad de todos los pormenores que le implicaban el cambio de régimen, y por ello el acto jurídico terminó afectado en su eficacia.

Es importante destacar que el derecho a la libre elección de régimen pensional contenido en la Ley 100 de 1993 en el marco del derecho a la seguridad social no riñe con las disposiciones legales que contemplan la exigencia del formulario, debiéndose entender que, más allá de la documentación formal, existe un sustrato material directamente relacionado con los derechos fundamentales que exige que el asegurado tenga una completa asesoría en su proceso de traslado de régimen pensional, la cual coloca a la respectiva administradora en el pleno del cumplimiento de sus obligaciones profesionales en ese sentido, bajo la dinámica del *“buen consejo”*.

En los alegatos de conclusión, la apoderada judicial de COLPENSIONES llamó la atención de este colegiado, en orden a solicitar que se revoque la sentencia de primera instancia, argumentando que la asegurada se encuentra inmersa en la prohibición de retorno establecida en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, sin embargo, dicha planteamiento no es aplicable a casos de ineficacia, ya que esa restricción opera en casos de libre elección de régimen pensional, más no en situaciones en las que se advierte que el acto de afiliación no produjo ningún efecto, al ser ineficaz el traslado por ausencia de información.

Tampoco es cierto, como lo hace ver la apoderada judicial de COLPENSIONES en sus alegatos de conclusión, que la carga dinámica de la prueba, manifestada a partir de su inversión, se erija en desproporcionada o desequilibrada, en tanto en estos casos le corresponde al fondo privado probar que efectivamente sí brindó asesoría al actor, ante la afirmación indefinida que hace la activa en sentido contrario, no sobra destacar que los elementos que establece el inciso 2º del artículo 167 del Código General del Proceso concurren todos en este caso, para que se haga imperiosa dicha inversión probatoria (*“la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares”*).

En consecuencia, **se confirmará** la sentencia de primera instancia, al haber declarado la ineficacia del traslado de la señora MARTHA LUZ DEL CARMEN MONCADA LOPERA dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad.

Bajo el anterior escenario, la situación pensional de la demandante, retorna al mismo estado en que se encontraba antes de suscribir el acto ineficaz de traslado a la AFP PROTECCIÓN SA., esto es, se encuentra válidamente afiliada al RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, administrado en la actualidad por COLPENSIONES.

El tema de las devoluciones económicas es pertinente revisarlo en virtud de la competencia en Grado Jurisdiccional de Consulta de que dispone este colegiado, que impone la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad pública codemandada que será quien asuma las futuras prestaciones económicas de la seguridad social que deban pagársele al demandante. A su vez, este tema constituye punto de disenso en la apelación de PROTECCIÓN S.A.

El apoderado judicial de PROTECCIÓN S.A. solicitó, se revoque la orden de trasladar las cuotas de administración y primas previsionales dada en el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia, al considerar que los

descuentos que realizó PROTECCIÓN S.A. a la cotización de la demandante se hicieron con fundamento en una disposición legal vigente (artículo 20 de la Ley 100 de 1993), estima que dichos descuentos son válidos y deben conservarse por parte del fondo privado que fue la entidad que administró los recursos de la cuenta de ahorro individual de la asegurada y que trasladarlos a COLPENSIONES constituiría un enriquecimiento sin causa.

Esta sala no acogerá esos argumentos y mantendrá la orden de traslado en los términos ordenados por la A quo. Ello en aplicación de la jurisprudencia de la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, que ha estimado que los efectos de la ineficacia deben tener un efecto integral sobre el valor de las cotizaciones y aportes, sin que pueda entenderse que se está generando un enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES.

Las órdenes dadas por la A quo se justifican desde el punto de vista de que a la entidad pública co demandada COLPENSIONES, debe garantizársele la integridad de la cotización sin descuento alguno, ya que será quien reciba la afiliación de la asegurada y para todos los efectos legales la tenga afiliada al fondo público sin solución de continuidad.

Si bien, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 establece la facultad que tienen las administradoras de descontar los gastos de administración y demás descuentos, ello opera en el marco de un traslado que no adolezca de ineficacia, esto es, que se trate de una pertenencia al régimen legítima que no sea ineficaz. Así, en actos jurídicos que conserven su validez y se hayan realizado en condiciones ordinarias con la garantía del buen consejo, el acompañamiento y la asesoría, es evidente que dichos descuentos pueden realizarse y no existiría lugar a devolverlos. No obstante, mientras el acto sea ineficaz, se encuentra justificado el retorno económico global de todo lo que se hubiere generado en virtud de ese acto que no nació a la vida jurídica.

Los efectos de la ineficacia se traducen en el hecho de que las cosas deban retornar al estado anterior, resultando intrascendente que la actora haya percibido unos rendimientos financieros a partir de la gestión administrativa de PROTECCIÓN S.A., en tanto COLPENSIONES no tiene por qué ver diezmada la cotización, ya que los referidos descuentos también existen en el régimen de

prima media con prestación definida, y no deben ser realizados por PROTECCIÓN S.A., sino por COLPENSIONES, que es donde siempre ha permanecido afiliada la actora.

Al respecto, resulta oportuno citar el reciente criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien, en sentencia del 29 de julio de 2020, SL 2877, Radicación 78.667, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, ha recordado que *“la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida...”*.

En consecuencia, **se confirmará** íntegramente la sentencia de primera instancia.

COSTAS PROCESALES DE SEGUNDA INSTANCIA

En esta instancia se han causado costas procesales, a cargo de PROTECCIÓN S.A, por resultar vencida en el recurso de alzada, y en favor de la señora MARTHA LUZ DEL CARMEN MONCADA LOPERA. Agencias en derecho: un (1) salario mínimo legal mensual vigente para 2022.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas, que se conoce en Apelación y Consulta, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales de segunda instancia a **PROTECCIÓN S.A**, y en favor de la señora **MARTHA LUZ DEL CARMEN**

MONCADA LOPERA. Agencias en derecho: un (1) SMLMV para 2022, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL
Magistrada